

## AMENAZAS DE MADURO

## Huéspedes incómodos

La presencia de irregulares colombianos en Venezuela y el aprovechamiento de la frontera con ese país como santuario son cuento viejo. Es un fenómeno que se remonta antes de Chávez y Maduro, quienes más de una vez expresaron su simpatía por las Farc, recibieron a sus dignatarios, y prohijaron sus acciones. Antecede a Uribe, quien hasta el último momento, y salvo ocasionales "treguas", denunció la tolerancia, cuando no el apoyo directo del que gozaban las "organizaciones narcoterroristas" en tierras de la Revolución Bolivariana. Y así fue durante la administración Santos, aunque le haya puesto sordina -como a tantas otras cosas- en aras de su apuesta en La Habana.

Pero hoy, ese fenómeno tiene nuevas dimensiones.

La penetración criminal en el régimen venezolano está suficientemente documentada, tanto por fuentes oficiales como por investigaciones independientes, y por testigos directos. Por una nefasta paradoja, acaso esa sea una de las claves que explican su supervivencia en medio de la disfuncionalidad. En muchas zonas del país, distintas organizaciones ilegales, dedicadas a formas no menos diversas de economía criminal, han establecido una relación simbiótica con las expresiones locales de ese régimen. Incluso hasta el punto de convertirse en factores de gobernabilidad, gestión económica, y control social.

En un plano más amplio, esa simbiosis se traduce en benévola negligencia, y a veces, en franca connivencia. Algunos observadores han llegado a



"Documentada penetración criminal en régimen venezolano"

Andrés Molano-Rojas\*

calificar al régimen venezolano de "mafocracia". Una mafocracia transnacional, a la que no escapa ni siquiera ni siquiera el control y el saqueo de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, a través de los cuales se administra el hambre y la precariedad en que viven muchos venezolanos.

Semejante "criminalización" estructural genera enorme repulsa en amplias capas de la población. Igualmente, entre los sectores que siguen siendo afectos al ideario bolivariano, pero que han tomado una distancia cada vez mayor del extravío chavista y de la corrupción madurista. Y también entre los sectores más "institucionalistas" del estamento militar, que ven con desagrado el margen de libertad tan amplio con el que operan estos criminales, y especialmente, el Eln y los elementos residuales de las Farc. ¡Como si no fuera suficiente con la omnipresente ocupación cubana!

Desde hace varios meses el gobierno de Iván Duque ha vuelto a llamar la atención sobre el asunto. El Grupo de Lima ha hecho eco de sus preocupaciones. A ello ha dado nueva credibilidad el retorno de Iván Márquez y sus compañeros contumaces a la violencia y a la ilegalidad, anunciado por ellos mismos en

un video presumiblemente grabado en Venezuela, un mes después de que el propio Maduro les diera expresa bienvenida durante la clausura del Foro de Sao Paulo. Y en efecto: ahí los tiene.

Cualquier cosa que desestabilice a Colombia y debilite al gobierno Duque haría las delicias de Maduro, y estaría más que dispuesto a apoyar a quien le ofreciera provocar ese efecto, por ejemplo, el grupúsculo de Márquez y compañía, o el recalitrante Eln. Pero que su afinidad y benevolencia para con ellos quede en tan grotesca evidencia no deja de desvelarlo, al tiempo que suscita en él temores atávicos.

Temor a una intervención militar, cuya probabilidad parecía haberse diluido pero que ha vuelto a emerger -sin que nadie hasta ahora la haya mencionado- por cuenta de su patrocinio a unas organizaciones que muchos califican como terroristas (y que como tales se comportan). Temor a que su familiaridad con esas mismas organizaciones repercute en la unidad del estamento militar, ya recorrido por algunas fracturas, y del cual depende su suerte.

Por eso ha salido a la defensiva. A declarar la alerta naranja y a desplegar su sistema misilístico (sic) ante la agresión que, según él, se prepara por enésima vez desde Colombia. Una bravuconada, ha dicho el presidente Duque. Un tremendo cinismo. Porque la verdadera amenaza para Venezuela son esos huéspedes incómodos que su régimen acogió, y cuya presencia y arraigo constituyen uno de sus peores legados.

\*Analista y profesor de Relaciones Internacionales

## RADIOGRAFÍA

## Nuestras políticas ambientales

Desde inicios del presente año existe una gran expectativa por conocer los desarrollos de las políticas ambientales en Colombia y por lograr mejoras reales en el sector ambiente, vale la pena preguntarse hoy ¿En qué va nuestra política ambiental? Y ¿Qué logros se han obtenido en la misma?

Dado el grave aumento de la deforestación en la última década, se esperaba encontrar formas efectivas para detenerla; según el reporte del Ideam, para el último trimestre del 2018, la Amazonía concentró el 43 % de las alertas tempranas de deforestación de todo el país y los departamentos de Guaviare y Meta son los que concentran la mayor parte de estas, combatir la deforestación es un desafío que contiene retos adicionales que tocan intereses diversos entre los agricultores, los ganaderos y los simples acaparadores de tierras. Hasta el momento no se ha conocido que se aumente la capacidad de control de las CAR ni el pie de fuerza de la policía ambiental, con lo cual el problema sigue en igual o mayor dimensión.

Desde otro punto de vista, se esperaba que la justicia fortaleciera las penas y su capacidad de aplicarlas, para los delitos ambientales, para ello se requeriría de un ordenamiento ambiental adecuado, que permita determinar cómo se delimitan las fronteras entre los diferentes usos y como se pueden controlar los desarrollos de diversas actividades en los mismos;



"Más áreas protegidas pero sin recursos para cuidarlas"

Álvaro Sánchez

los ordenamientos ambientales a nivel municipal son hasta el momento paños de agua tibia y no existe una norma que obligue a los municipios a tener este tema determinado en detalle, los POT no son herramienta suficiente para ese fin. En este aspecto tampoco se ha avanzado lo suficiente y estamos a la espera de una adecuada normalización del tema.

A mediados de 2018 se presentó, por segunda vez, un proyecto de ley para prohibir el uso del fracking en Colombia, esta medida podría llegar a tomarse, con nefastas consecuencias para la economía nacional; estamos a la espera de una iniciativa del gobierno nacional que permita desarrollar explotaciones petroleras a través de esta técnica, pero con los controles y garantías que aseguren el mantenimiento de la línea base de nuestro territorio. Hasta la fecha se ha centrado la discusión entre si al fracking o no al fracking, no se han conocido posiciones gubernamentales sobre condiciones técnicas para el fracking.

El tema de las consultas populares y de las consultas previas sobre el tema también se ha convertido en una piedra en el zapato, la realidad es que en aras de un planteamiento "democrático", se ha dado una responsabilidad a personas sin conocimiento técnico para decidir en temas técnicos; si la población hubiera tenido que decidir sobre las vacunas, quizá se hubiera derrotado su uso por temor al pinchazo. Las consultas se han convertido en una lucha ideológica que no tiene nada que ver con el tema ambiental y en la cual se manipula la voluntad del ciudadano con discursos sin fundamento técnico.

Otro tema complejo es el aumento de las "áreas protegidas" en nuestro país, es real el hecho de que cada día se aumenta el número de hectáreas protegidas de nuestro territorio, pero es también evidente el hecho de que no se aumentan los recursos para protegerlas realmente; de esta manera cada día hay menos funcionarios protegiendo nuestra riqueza "protegida" y de esta manera se permite su explotación de forma ilegal, esto agrava el problema y pone en riesgo la estabilidad ambiental del territorio.

Así las cosas seguimos esperando acciones contundentes que redunden en beneficio de los recursos naturales del país, sin perjuicio del desarrollo económico, es decir esperamos un real desarrollo sostenible, para el bienestar de todos.

alsanchez2006@yahoo.es @alvaro080255